



ayuntamiento es totalmente abierto, funcionamos por grupos de trabajo alrededor de cada concejala, que está totalmente delegada. Estos grupos han dado pie a que actividades que hemos organizado hayan tenido éxito, porque la gente lo siente suyo.

Juan Carlos: Nosotros en Ávila llevamos la etiqueta de «rojos», precisamente porque queremos que participe la gente, algo que en el resto del territorio está normalizado.

Cristina: Yo creo que es increíble a estas alturas que pedir participación ciudadana parezca algo revolucionario, como si no fuéramos adultos para saber dónde queremos ir. Aquella revolución de Allariz la lideró Anxo Quintana (después vicepresidente de la Xunta de Galicia); recuerdo que cuando tomábamos posesión del cargo en las diferentes legislaturas, nos llevaba donde estuvo el castillo de Allariz, desde donde se ve una parte importante del municipio y nos decía: «Aquí estamos para soñar con lo que queremos ver dentro de 20 años, con un futuro para las generaciones que vendrán e implicar a toda la población que quiera sumarse a esto». Esto no puede solo ser el sueño de una corporación municipal, por mucha mayoría absoluta que tengamos, tiene que ser el de todo el mundo.

Y si os imagináis que subís a ese punto desde donde veis vuestro municipio, ¿qué es lo que soñáis?

Juan Carlos: Yo me he comprometido a que en los años que me queden de vida, demostrar que el medio rural es donde está la calidad de vida, el futuro real de los seres humanos. Me gustaría que eso sucediera.

Cristina: Yo sueño con volver a ver las fotografías de hace años tomadas desde ese mismo punto, donde todo el territorio estaba ocupado y trabajado por gente.

Cristóbal: Yo sueño con ver muchos niños corriendo por las calles, pegando pelotazos a las casas de la gente y poniéndolo todo patas arriba.

Revista SABC

Cristóbal: Sí, el discurso que hay que poner sobre la mesa debe estar más relacionado con lo afectivo, porque al final la gente de los pueblos nos seguimos entendiendo fácilmente, y tenemos unas características que están vinculadas con el trato humano, con lo pequeño, con tener la puerta abierta de tu casa, cooperar y ayudarnos. Si hablamos de eso, vamos a estar muy alejados de las corrientes de extrema derecha, que no valoran lo humano. Nuestra lucha debe estar ahí.

Los pueblos pequeños pueden ser laboratorios para ensayar nuevas formas de gobierno más horizontal. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cuáles son las claves para que la gente y los colectivos participen en las políticas municipales?

Cristóbal: A nosotros, la participación nos diferencia de los gobiernos anteriores. Nuestro

PARA SABER MÁS

—La versión íntegra de este conversatorio estará disponible en www.soberaniaalimentaria.info

movimientos sociales y ayuntamientos aprendizajes del trabajo conjunto

Reflexionamos sobre estos cuatro años de políticas alimentarias municipales a partir de los resultados recogidos en una serie de entrevistas a personas representativas del ámbito social, de la producción y de la gestión municipal en Madrid, Valencia y Córdoba, y de nuestra propia experiencia en estos procesos.

En los cuatro años transcurridos desde las últimas elecciones, las políticas alimentarias han irrumpido en la agenda de numerosos ayuntamientos del Estado, como respuesta a la demanda de los movimientos sociales y en el contexto global favorable que ha supuesto el Pacto de política alimentaria urbana de Milán. Con anterioridad a las elecciones municipales de 2015, los movimientos sociales agroecológicos propusieron una hoja de ruta para los gobiernos municipales, recogida en documentos como la *Carta por una soberanía alimentaria desde nuestros municipios* (elaborada en el Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria de Zaragoza en 2014) y otros más locales. Se trata de demandas y propuestas claras que surgen de una larga trayectoria en el trabajo en torno a la soberanía alimentaria por parte de entidades de la sociedad civil, en ocasiones reunidas en espacios de articulación.

Numerosas ciudades europeas habían adoptado ya políticas en este sentido, pero en nuestra geografía se puede destacar la centralidad del

enfoque agroecológico en el proceso, debido al protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil y al apoyo de las candidaturas municipalistas. De esta forma, se han abierto espacios que pretenden coproducir políticas públicas en los que las organizaciones de la sociedad civil están trabajando junto a personal técnico y político de los ayuntamientos en la definición y desarrollo de estrategias y proyectos agroalimentarios.

Pero ¿hasta qué punto podemos hablar de coproducción de políticas públicas?, ¿cuáles han sido las claves de estos procesos? y ¿qué aprendizajes podemos extraer de los mismos? Al igual que en otras cuestiones centrales en la transición ecosocial (derecho a la vivienda, movilidad, modelo urbanístico...), la percepción que se tiene en los movimientos sociales y en las instituciones del compromiso de cambio y la capacidad de impacto de las acciones desarrolladas puede diferir. Las expectativas de la sociedad civil a menudo chocan con la capacidad de acción de los equipos de gobierno, con los ritmos municipales y con las trabas normativas y burocráticas.

El encuentro entre sociedad civil y ayuntamientos: superando las desconfianzas

Sin duda, uno de los factores que ha facilitado el trabajo entre la sociedad civil y los ayuntamientos ha sido la incorporación de personal político y técnico con una trayectoria previa en movimientos sociales. En la definición y seguimiento de políticas alimentarias, ha sido necesario desactivar las desconfianzas mutuas entre institución y sociedad civil, dado que se trata de procesos que implican a perfiles muy diversos tanto fuera como dentro de los ayuntamientos, debido a la transversalidad del tema. En este tiempo se han establecido nuevas relaciones en múltiples direcciones, no solo entre institución y movimientos sociales, sino también entre organizaciones de la sociedad civil relacionadas o no con el ámbito agroecológico. Se puede concluir que se ha llegado a un entendimiento mutuo, y que la sensación general es de estar trabajando en común con unos objetivos compartidos.

Los espacios de interlocución y coordinación

Conformar espacios en los que las organizaciones de la sociedad civil trabajan junto a representantes municipales ha sido fundamental para avanzar en la definición de políticas o acciones y desactivar las desconfianzas. Las formas varían, desde los Consejos Municipales como el de Valencia, hasta otros espacios no colegiados, en forma de Mesa de Seguimiento (Madrid) o Mesa de Coordinación (Córdoba). Precisamente la formalización de estos espacios es uno de los debates abiertos: su continuidad y legitimidad, el tiempo necesario para desarrollar reglamentos y

aprobarlos oficialmente, la definición de las cuotas y condiciones de participación en los mismos o sus funciones.

Se ha detectado como clave en el buen funcionamiento de estos espacios el interés y el compromiso de las personas que participan en ellos y su predisposición a cooperar. Aunque en un balance general se puede afirmar que hasta el momento han funcionado porque existe el compromiso de generar un trabajo colectivo, también se han dado situaciones en las que las personas participantes se han parapetado en la defensa de intereses particulares, perdiendo la visión estratégica a medio y largo plazo.

Destaca la necesidad de incluir una diversidad suficiente de actores tanto institucionales como sociales, a la vez que mantener su capacidad operativa, para que realmente sirvan para tomar decisiones e impulsar acciones concretas sin que se pierda el interés inicial.

¿Coproducción de políticas públicas?

Una cuestión central es hasta qué punto se puede hablar de coproducción de políticas públicas. Algunas personas destacan que, más que políticas, se están desarrollando acciones concretas, mientras que las estrategias o programas integrales de largo recorrido se han definido o están en definición pero es aún pronto para valorarlas. Se trata de procesos que deben permitir ensayar, aprender y redefinir sobre la marcha.

En relación con los tiempos necesarios, otra cuestión que se ha planteado es la necesidad de pasar de los diagnósticos y estudios a la acción, para poder llegar a resultados tangibles cuanto antes. Algunas personas indican que ya hay suficiente experiencia y conocimiento desarrollado,

y que hay acciones que se pueden realizar sin perder tiempo ni malgastar recursos en una justificación excesivamente detallada de los motivos, los precedentes, etc. En este sentido, se están dando pasos con la implantación de experiencias piloto donde se desarrollan acciones directas (Córdoba).

La prioridad y el compromiso político

La prioridad política y la asunción de la agenda por parte de las altas instancias municipales han sido desiguales. En algunos casos, las políticas alimentarias han sido muy visibles, como en Valencia, a raíz de la capitalidad de alimentación sostenible de la FAO en 2017. También en Madrid el apoyo de la alcaldía ha permitido que sea una cuestión transversal que involucre a distintas concejalías y departamentos o delegaciones municipales. En Córdoba, el interés de varias delegaciones y algunos grupos municipales ha impulsado, con el detonante de la oportunidad política del Pacto de Milán, una mesa de coordinación transversal.

Sin embargo, los avances concretos no han llegado a una consolidación profunda de la agenda agroecológica en los municipios. Si se hace un balance general, algunas cuestiones concretas se han normativizado, como el cambio de criterios de contratación en la Red de Escuelas Infantiles de Madrid. En otras cuestiones, se han definido acciones que no se han ejecutado o que se han desarrollado en forma de proyectos piloto que no están suficientemente consolidados, y muchas decisiones no han sido vinculantes, lo que se achaca a una falta de compromiso político y a un control insuficiente de los mecanismos de gestión y los protocolos municipales. La cuestión del presupuesto destinado a estas políticas, o de

cómo se desglosa ese presupuesto, también da una idea de la prioridad que se les otorga dentro de los ayuntamientos.

En cualquier caso, es evidente que los ayuntamientos son fundamentales para impulsar estos procesos y extender las actuaciones hasta ámbitos que los movimientos sociales no alcanzarían por sí mismos.

Gestión municipal: ritmos, competencias y movilización de recursos

Uno de los principales problemas detectados ha sido la complejidad de la gestión municipal. A un ritmo lento en el desarrollo y consolidación de acciones concretas, y en la formalización de nuevas formas de hacer (protocolos, espacios, etc.), hay que sumar la dificultad de vencer la inercia en el funcionamiento institucional, las resistencias internas, el atrincheramiento en la interpretación cerrada de los reglamentos, o la inexperiencia de las personas que por primera vez tienen que desenvolverse en estos ámbitos. Todo ello entorpece enormemente el ensayo de innovaciones. Detrás de esta dificultad de gestión, además de la propia arquitectura normativa y jerárquica de los ayuntamientos, se encuentra su falta de recursos humanos y económicos. En la práctica, el inconveniente de no contar con suficiente personal municipal especializado, de no poder realizar nuevas contrataciones de personal propio, de tener bloqueados los presupuestos y

“ Los ayuntamientos son fundamentales para impulsar estos procesos y extender las actuaciones hasta ámbitos que los movimientos sociales no alcanzarían por sí mismos. ”



Mural realizado en 2016 por Xoana Almar y Miguel Peralta, en Vigo.
Foto: Cestola na Cachola

de no poder movilizar recursos con rapidez ha supuesto un freno importante al avance de los procesos. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil han aportado una visión más amplia y han tenido capacidad de buscar y coordinar recursos externos.

Por otra parte, destaca la falta de fluidez en la comunicación entre áreas municipales, la complejidad en las relaciones y procedimientos, y la superposición de competencias y responsabilidades. Cuestiones que desde fuera parecen sencillas, se vuelven complicadas, lentas y costosas de coordinar y ejecutar en su traducción a los procedimientos municipales. A esto hay que sumar que en ocasiones las competencias municipales no son suficientes para desarrollar las acciones o llevar a cabo los cambios estructurales precisos.

Las organizaciones de la sociedad civil: tensión entre la ejecución y la reclamación

El papel de las organizaciones de la sociedad civil ha sido el de expertas que aportan conocimiento especializado, experiencia y metodologías de trabajo, que vienen a suplir la falta de experiencia en este campo dentro de los ayuntamientos. Esta función se cumple a través de los espacios de participación y el aporte de trabajo voluntario, y mediante el desarrollo de un trabajo profesionalizado en la gestión de proyectos concretos.

La otra cara de una situación que podría parecer favorable para las organizaciones de la sociedad civil es que este cometido exige grandes esfuerzos y recursos en el seguimiento, en la realización de propuestas y en la ejecución de las mismas. Esfuerzo y tareas que en ocasiones se perciben como responsabilidad de la parte institucional y que se asumen voluntariamente para que no decaigan los procesos. Esta situación resta energía a otros espacios no institucionales de encuentro de colectivos desde los que ejercer contrapoder. Los movimientos sociales reconocen esta tensión y admiten también que las energías se dividen. Cuando además se adopta el papel de entidades profesionalizadas en la consultoría y ejecución de acciones, es complicado seguir construyendo una visión más estratégica y reclamar a la institución. También es cierto que algunas entidades no han tenido la capacidad de respuesta o el interés en profesionalizarse y la cuestión entonces está en quién puede desarrollar

y ejecutar tareas que requieren un enfoque agroecológico y de economía solidaria, que es ajeno a la mayor parte de las empresas que tradicionalmente trabajan con la Administración.

Finalmente, cabe destacar que el trabajo en los espacios de coordinación y en la ejecución directa genera un aprendizaje continuo del personal técnico, una mayor proximidad con los representantes municipales y un conocimiento detallado de las trabas que estos afrontan en el desarrollo de los compromisos asumidos. Sin embargo, esta empatía se reconoce como algo que no debería frenar la reclamación cuando los avances no son suficientes.

La agroecología en el discurso municipal: entre el aprendizaje y la tergiversación

Otra cuestión es si la agroecología se ha integrado en el discurso municipal y de qué manera lo ha hecho. Aunque la Administración reconoce que estos procesos han tenido un componente importante de aprendizaje para personal técnico y político, es posible que esta integración haya sido más operativa que conceptual, es decir, que se haya reflejado en un conocimiento de datos y procesos que se dan en la ciudad o en enriquecer la mirada sobre sus competencias, más que en una comprensión profunda de las implicaciones y consecuencias de afrontar una transición agroecológica.

En ocasiones, la visibilización de los valores agroecológicos en el discurso no se ha producido, o los conceptos están presentes solo en documentos técnicos, pero no constituyen el centro del mensaje que se transmite a la ciudadanía en las estrategias de comunicación. En otros casos, los conceptos se han asumido pero se han tergiversado, de modo que se utilizan sin tener un conocimiento claro de las diferencias o significados de los mismos. Finalmente, cabe un peligro de convencionalización del discurso, como ha podido ocurrir con otros paradigmas como el de la sostenibilidad ambiental, reducido, debilitado e instrumentalizado en su uso institucional.

Nerea Morán Alonso, Isabel Vara Sánchez, Lidia García García, David Gallar Hernández y Ana Moragues Faus

Investigadoras y activistas sobre agroecología y soberanía alimentaria en Madrid, Córdoba y Valencia

DE UN VISTAZO
Y
MUCHAS ARISTAS

Con unos cuantos ejemplos, como un vistazo a vuelo de pájaro, mostramos algunas de las iniciativas de políticas alimentarias municipales que, por su origen rural o su contundencia, pueden ser inspiradoras.

ROMPER EL LOCALISMO MUNICIPAL

En Argareal Rural llevamos muchos años trabajando en el desarrollo rural sostenible para la mejora de calidad de vida de la población local a través de la participación activa. Entendemos la participación activa como sagrada, es nuestro modus operandi de cada día. Defendemos la colaboración y ayuda mutua entre los ayuntamientos y la población, pero también la cooperación entre ayuntamientos, que no siempre se tiene presente.

En el caso de nuestro pueblo, Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar (Ávila), si no se hubiera unido con otro municipio ahora mismo no podría contar con un operario todo el año al que llamamos el ángel de la guarda porque sus funciones van más allá de las habituales, se ocupa de la «ayuda humanitaria». Solo saber que hay una persona preocupada por quienes viven en los pueblos (la mayoría, de avanzada edad), produce gran tranquilidad a las ya pocas personas que pasan aquí todos los días del año.

Desde la ruptura del localismo municipal y la participación activa, por aquí han nacido muchos proyectos. Cinco municipios trabajamos juntos a partir de un programa de prevención de incendios forestales y como resultado han surgido iniciativas como la Asociación de Ganaderos del Aravalle AraVgredos, en la que cinco ganaderos comenzaron un proceso de comercialización de la carne de sus reses en tramo corto (vecindario, turistas, población flotante); la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas ProUmbrías, que autogestiona las fincas y sus recursos (pastos, leña, agricultura, etc.); o la Asociación Micológica Amica, donde la población local trabaja conjuntamente para lograr un uso sostenible del recurso.

Asimismo, a partir de un Plan Estratégico de Desarrollo Rural Sostenible, ha surgido, por ejemplo, la Asociación de Oficios Artesanos de la Sierra de Ávila Ofyarte, que aglutina a personas de toda la comarca y organiza todo tipo de eventos, o una asociación que se dedica a la producción de huevos ecológicos y a su distribución en proximidad. Incluso otros cinco municipios de la provincia de Ávila han creado una asociación llamada Ávila en Clave Etnobotánica dedicada a la promoción, investigación y divulgación de los usos de las plantas.

Por último, se puso en marcha la Escuela de Alcaldes de Castilla y León. Trabajando codo con codo con otros municipios se advierten necesidades colectivas que de otra forma no podrían abordarse. Es fundamental dotar a cada uno de nuestros pueblos de capacitación y dar a conocer programas que están funcionando con éxito entre alcaldías, concejalías, personal técnico, etc.

En resumen, hay que romper el localismo municipal. Tan solo hay que recordar el trabajo de los pueblos de toda la vida: huebras, hacenderas, a hombro vecino, a prestación personal, a caminos, a regaderas..., que a lo largo de cientos de años dibujaron el paisaje actual de nuestro mundo rural y que ahora está cambiando a una velocidad vertiginosa por políticas alejadas del territorio.

Juan Carlos Soto

Teniente de alcalde de Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar y coordinador de Argareal Rural

RED TERRAE, IMPULSANDO LA NEORRURALIDAD AGROECOLÓGICA

La Red Terrae se inició en 2010 y actualmente cuenta con 60 municipios. Su objetivo inicial era dinamizar los recursos infrautilizados de municipios rurales, sobre todo las tierras. Ya en 2012 se organizó un banco de tierras en línea, con un sistema de contratos de custodia agroecológica para personas emprendedoras; al año siguiente, comenzamos a diseñar una estrategia formativa y a ofrecer formación en alfabetización y emprendimiento agroecológico. Asimismo, se creó la marca Terrae Eokmo que garantiza la compra de productos durante unos meses a personas en prácticas de producción agroecológica por parte de restaurantes.

Pero nos parece claro que debemos ampliar nuestra estrategia, sobre todo en un momento en que la PAC va a continuar manteniendo las dinámicas que generan la actual sangría agro-demográfica. En este sentido, una de nuestras principales apuestas es el **enfoque NERA** que ya ensayamos en un pueblo de 100 habitantes en Salamanca en 2014, y que estamos trabajando con apoyo de la Junta de Extremadura y del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA). NERA es una

estrategia para enlazar comunidades urbanas y rurales. Comunidades de acogida en los pueblos que estén dispuestos a recibir grupos de personas urbanas que se formen trabajando la tierra, y que al acabar la formación se queden como nuevas agricultoras o ganaderas. Por eso necesitamos el apoyo de «comunidades de salida», barrios, asociaciones vecinales, universidades, etc., que quieran apoyar la salida de personas y se comprometan a comprar sus producciones agroecológicas, enlazando ciudad y campo. En este momento en Red Terrae esta línea de trabajo está suscitando el interés de muchos pueblos asociados. Hemos acumulado mucha oferta de tierras, que necesitan para ser reactivadas agroecológicamente una población neocampesina de origen urbano o no agrario, que tenemos que acompañar, formar y acoger. Este es el gran reto de la transición agroecológica que da al tiempo respuesta al reto demográfico de los extensos despoblados de la península ibérica.

francO Llobera
Responsable de formación
y prospectiva de Red TERRAE

DE INICIATIVAS POPULARES A LEYES. LA LEY DE LA HUERTA DE VALENCIA

El pasado mes de febrero las Cortes Valencianas aprobaron, gracias a la mayoría de progreso (PSOE, Compromís y Podem) la largamente esperada Ley de la Huerta de València (Ley 5/2018). La propuesta partía de una Iniciativa Legislativa Popular del año 2001, impulsada por entidades ecologistas y vecinales. El proyecto pretende salvaguardar y dinamizar este paisaje histórico que se extiende a norte y sur de la ciudad de València y que abarca cuarenta términos municipales, un entorno agrario en el que la presión urbanística ha hecho desaparecer casi el 70 % de la superficie en medio siglo, dejando acequias históricas en estado crítico. La Ley, por otra parte, sirve como marco general para la aprobación de otros dos instrumentos legales. El primero es El Plan de Acción Territorial (PATH), aprobado en noviembre de 2018, que establece los tipos y

zonas de protección, regula los usos y limita el crecimiento urbanístico. El segundo es el Plan de Desarrollo Agrario, que se centra en la regulación y el apoyo a la actividad agraria en la huerta, **para garantizar que la actividad agraria predomine sobre otras como el turismo o los servicios.**

Por tanto, los objetivos de la Ley y ambos planes pasan, por aportar seguridad jurídica; las personas que se dedican profesionalmente a la agricultura necesitan saber que la tierra que cultivan tiene un futuro garantizado y no va a acabar expropiada o terciarizada. Asimismo, se recoge la demanda histórica de promocionar los productos de la huerta con una marca de calidad, procurando mejorar la imagen del producto para la exportación y para obtener precios más justos. Pero además, como es habitual en muchos espacios agrarios, el abandono de cultivos se ha

convertido en uno de los principales problemas debido a la falta de productividad, de relevo generacional o, en el caso de València, por las expectativas urbanísticas derivadas de la proximidad a una gran área metropolitana. En estos casos, la Ley propone el arrendamiento forzoso en favor de un tercero o la cesión al Ente Gestor de la Huerta, aunque remarcando que la «expropiación de uso» solo se daría en casos extremos y tras un proceso de mediación. Se trata de una medida que ha provocado la crítica de la oposición, pero que es muy importante para evitar

las compras especulativas en la huerta. El futuro agrario de estas superficies, por tanto, pasa por potenciar el arrendamiento. Con este objetivo, ayuntamientos como el de València o la propia diputación provincial están creando bancos de tierras de gestión municipal. El objetivo obvio es facilitar el acceso a la tierra a jóvenes que apuesten por la agricultura.

Marc Ferri
Per l'Horta

IRUÑEA, UNA GESTIÓN VALIENTE

Si estás en el tema de la soberanía alimentaria y te ha tocado batirte el cobre con ámbito municipalista, habrás escuchado mil excusas y sentido mil resistencias. Que si es un lío; que si no va a alcanzar con la producción local campesina; que no se puede adaptar tal o cual ley; que el tema alimentario es muy complicado; que lo local, fresco y de temporada es muy caro o que no les va a hacer gracia a las usuarias... Pero, en realidad, todas estas barreras se vencen con buenos ingredientes: una taza de presión de la sociedad civil, unas cucharadas de receptividad y voluntad política, buena dosis de formación y transición del personal técnico y el funcionariado, un chorro de participación e inclusión de la sociedad y, sobre todo, fuego lento de soberanía alimentaria y corresponsabilidad entre producción campesina, consumo responsable y compra pública.

Es de esta manera como las cosas están marchando en Pamplona/Iruñea. En 2016 surge en Navarra un proceso en torno al llamado Parlamento de Soberanía Alimentaria para la construcción colectiva de Sistemas Alimentarios Locales sostenibles con criterios de soberanía alimentaria. En esa dirección, puede decirse que Iruñea está haciendo los deberes. En la última legislatura, la ciudad se adscribe al Pacto de Milán de Política Alimentaria Urbana y a la Red de Ciudades por la Agroecología. Todo ese itinerario podría resultar una ensalada de declaraciones sin aterrizaje práctico, pero fruto del trabajo constante, en 2018 se publicaron los pliegos para diseñar todo un flujo de trabajo en las cocinas y menús de las escuelas infantiles llamados Hemengoak (de aquí), adaptados a la despensa local con criterios saludables, ecológicos

y nutricionales, que la asociación Menjadors Ecològics contribuyó a hacer realidad. A principios de 2019 se han publicado los pliegos de compra pública para 10 escuelas infantiles, lo que implica que 1000 menús al día serán de alimento fresco, local, de temporada y ecológico, con criterios de soberanía alimentaria.

En ese sentido, el Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles de Iruñea ha sido audaz y ha apostado por unos pliegos con 13 lotes de pan, lácteos, frutas y verduras, con criterios de inclusión social y muy orientados a que las producciones y transformaciones campesinas puedan optar a este espacio de compra pública. La idea es que los menús Hemengoak alimenten a la población infantil y al mundo rural vivo, la despensa natural de Iruñea/Pamplona. Toda esta apuesta ha sido posible gracias a un trabajo en red y a la construcción de alianzas entre la sociedad civil y la Administración pública. La implicación del Grupo de Compra pública de Navarra (compuesto por Asociaciones de APYMAS de las escuelas, parlamentarias, productoras, sindicatos agrarios y escolares, organizaciones sociales...) y el trabajo realizado por INTIA y CPAEN han hecho que este cambio sea posible. Pero también el Ayuntamiento de Pamplona se ha dejado interpelar de modo proactivo y ha asumido de modo corresponsable un camino no exento de dificultades y vértigo para recuperar las cocinas con los colores, saberes y sabores de nuestro paisaje y paisanaje.

Jaxin G. Viniegra
Fundación Mundubat
y Grupo de Compra Pública de Navarra

MUNICIPIOS CONTRA LAS MACROGRANJAS

Según Daniel González, de Pueblos Vivos de Cuenca, que forma parte de Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, en el último año, solo en la provincia de Cuenca se han presentado más de 30 solicitudes de licencias de explotación para macrogranjas porcinas, mientras que en años anteriores rondaban las 4 solicitudes. Este incremento se debe, principalmente, a los planes de expansión de dos de las mayores empresas cárnicas del Estado (Incarlopsa y Vall Companys), y a las ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, desde 2016, incluye el sector porcino de cebo como estratégico.

Ante esta situación, la población de las zonas rurales, movimientos ecologistas y de defensa del territorio, organizaciones de protección animal, consumidoras, ganaderas extensivas y defensoras del mundo rural, se han agrupado en diferentes plataformas para impedir que el beneficio de unas pocas empresas cárnicas destruya el entorno y el empleo de sus comarcas.

Uno de los aspectos que critican es la falta de rigor en la evaluación ambiental por parte de las administraciones competentes en el momento de aprobar la licencia para la instalación de macrogranjas. Sentencias recientes (como las de Huerta de la Obispalía y Cañete, en Cuenca) dan la razón a la posición de las plataformas, al confirmar que muchos proyectos no cumplen los requisitos exigidos por la normativa y, sin embargo, el órgano ambiental les ha dado el visto bueno.

Ante la proliferación de solicitudes, las plataformas solicitan una moratoria en la concesión de autorizaciones ambientales, pero ¿puede hacerse algo más contra las macrogranjas?

Con voluntad política se pueden aprovechar las actuales leyes y normativas para impedir su instalación. La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental estatal y la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León establecen, entre otras causas de inadmisión, el pronunciamiento de un órgano de la administración pública competente manifestando la inviabilidad del proyecto. En Cidones (Soria), el Ayuntamiento ha usado sus normas urbanísticas municipales para argumentar que el emplazamiento para la granja no es posible y, de momento, la Comisión de Medio Ambiente no permite la instalación, puesto que los informes municipales demuestran su inviabilidad desde la perspectiva urbanística y para garantizar la protección natural, paisajística y forestal de la zona.

Ahora es el momento oportuno para exigir a los ayuntamientos que defiendan el territorio y que pongan dificultades normativas a la instalación de estas macrogranjas poniendo en práctica el principio de autonomía y de una de las pocas competencias que les quedan: la gestión urbanística del municipio.

Revista SABC

LAS MEDIDAS QUE NADIE EMPUJA

En todo el Estado español se está demostrando que desde los municipios se pueden empujar proyectos e iniciativas para llenar de vida el mundo rural. Sin embargo, por radicales, complicadas o utópicas, muchas no se llevan a cabo. Y debemos preguntarnos por qué.

Red Terrae explica que en sus municipios trabajan para enlazar comunidades rurales y urbanas y facilitar el establecimiento de personas en los pueblos. Pero, desde las propias ciudades, ¿no existen propuestas para incentivar o facilitar este tipo de prácticas, para disminuir su población? Seguramente, despoblar las ciudades es una de las mejores maneras para garantizar su sostenibilidad ambiental.

A la vez, observamos que el fenómeno de la despoblación permite que se acepten proyectos muy agresivos y dudosos para el medio rural, como las macrogranjas de cerdos o la minería. ¿Existen iniciativas municipales para declarar sus territorios libres de este tipo de proyectos? ¿La población local los respaldaría más allá de si entra o no en sus competencias?

En muchas ciudades, se consigue poner en marcha nuevas cooperativas de consumo o incluso supermercados cooperativos para favorecer otro modelo de consumo. Mientras esto ocurre, también vemos cómo se multiplican los grandes supermercados convencionales. ¿Existen

iniciativas municipales para prohibir nuevas grandes superficies? Más allá del cumplimiento de las leyes europeas sobre la competencia, ¿la sociedad apoyaría medidas de este tipo? ¿Queremos seguir permitiendo que grandes cadenas de comida rápida se instalen junto a los colegios o institutos favoreciendo una mala alimentación?

Por último, la gran cuestión. Como se ha explicado en muchas ocasiones, los ayuntamientos son los responsables políticos de cada uno de los grandes mercados de abastos que centralizan la distribución alimentaria de las ciudades. Los *mercados* (Mercabarna, Mercamadrid, Mercavalencia) son empresas públicas con un 51% de propiedad en manos del ayuntamiento correspondiente. ¿Favorecer un nuevo modelo de alimentación local y de proximidad no pasa por abordar el funcionamiento de los mercados que en la actualidad son, sin ningún lugar a dudas, un eslabón fundamental del sistema alimentario industrial y globalizado? ¿Por qué no evitamos que por los mercados circulen los tomates de Holanda que arruinan la producción local u otros muchos ejemplos? ¿De qué sirve promocionar la sostenibilidad alimentaria si no combatimos directamente los modelos insostenibles?

Revista SABC

Mural de Xoana Almar y Miguel Peralta (2016), en Vigo. Foto: Cestola na Cachola

